**JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO
TUNJA – BOYACA**

REF: Ejecutivo de **Servicios de Ingeniería PARA LABORATORIOS S.A.S.**
Contra Colombiana de Salud S.A. Radicado No.2018-0200-01.

Tunja, dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Se pronuncia el despacho sobre el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la demandada contra la sentencia proferida el once (11) de octubre de dos mil veintidós (2022) proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja dentro del proceso Ejecutivo Singular seguido por **SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LABORATORIOS S.A.S.** Contra **COLOMBIANA DE SALUD S.A.**

ANTECEDENTES:

1°.- Mediante demanda repartida al Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja, **SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LABORATORIOS S.A.S.** a través de apoderado judicial, solicita se libre mandamiento de pago a su favor y en contra de **COLOMBIANA DE SALUD S.A.** pretendiendo el pago de las cantidades de dinero referidas en la demanda así como los intereses moratorios desde el día en que se hicieron exigibles hasta cuando se verifique el pago y se condene en costas del proceso a la demandada.

2°.- El juzgado de primera instancia mediante providencia del 20 de septiembre de 2018, profirió orden de pago a favor de la demandante y en contra **COLOMBIANA DE SALUD S.A.** por la cantidad total de SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS (\$77'108.187.00), por concepto del capital contenido en las Facturas de Venta Ns° 3771, 3811, 3839, 3841, 3893, 3951, 3971, 3976, 3993 y 4010 presentadas como título ejecutivo; por los intereses moratorios de las cantidades de dinero indicadas allí, desde las fechas que se mencionan hasta la fecha que se efectúe el pago; dispuso la notificación a la demandada, se le imprimió el trámite respectivo al proceso y se le reconoció personería para actuar a la abogada **JULIETH VANESA BARROS.**

3°.- Una vez notificada la demandada del auto mandamiento ejecutivo, a través de apoderado judicial oportunamente contestó el libelo oponiéndose a las pretensiones de la demanda y formulando la excepción de fondo que denominó: **“FALTA DE ACEPTACION DE LAS FACTURAS, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE COLOMBIANA DE SALUD S.A.”**

4°.- Descorrido el traslado de la excepción, la parte demandante se opuso a su prosperidad. Las pruebas fueron ordenadas y practicadas y vencido el término probatorio, en audiencia del once (11) de octubre de dos mil veintidós (2022), el a-quo profirió sentencia donde tuvo por no probada la excepción presentada; ordeno seguir adelante la ejecución en favor de **SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA**

LABORATORIOS S.A.S., y en contra de la demandada, condenó en costas a la parte demandada.

4.- Fueron fundamentos de la anterior decisión el considerar que, de los documentos allegado como prueba, es decir las diferentes facturas, las mismas cumplen los requisitos generales de todo título valor y los requisitos especiales de las facturas cambiarias conforme a los artículos 621,625 y 774 del C. de Co. Que las mismas si hay una firma, que corresponde a Leidy Castellanos, quien en su declaración dijo que trabajó para Colombiana de Salud, indicó sus funciones, era quien recibía los reactivos que llegaban y que según el artículo 773 del C. De Co. No se puede alegar la falta de representación de la persona que aparece aceptando la factura.

5.- Inconforme con la anterior determinación, la apoderada de la parte demandada interpone el recurso de apelación el que sustenta diciendo en síntesis que la firma y aceptación de las facturas deben ser del Representante Legal de Colombiana de Salud, *“quien es quien puede obligar a la entidad...”*. Dice que hay omisión de los requisitos que indica el Decreto 4747 de 2007, compilado por el Decreto 780 de 2016 y en anexo técnico 3047 de 2008 porque se trata de un *Título Ejecutivo Complejo*.

6°.- Habiendo correspondido por reparto la segunda instancia a este despacho, se admitió la alzada mediante providencia del doce (12) de enero de dos mil veintitrés (2023), se dispuso conceder el término de cinco días a las partes para que sustentaran por escritos sus recursos de conformidad con el artículo artículo 12 de la Ley 2213, manifestando en síntesis la recurrente, que se reconocieron una serie de facturas, aún en ausencia de la firma o sello de COLOMBIANA DE SALUD S.A. o de tan siquiera su representante legal, persona que podría llegar a obligar a la entidad. Por lo cual, manifiesta además, que para que la factura de venta tenga validez como título valor es necesario que el cliente o comprador la firme, pues de lo contrario no se puede acreditar que la obligación proviene del deudor y que trae a colación algunas precisiones conceptuales y jurisprudenciales en relación a los títulos complejos, la exigibilidad de los mismos y sus requisitos, que en su sentir no cumplen las facturas presentadas en la ejecución de la referencia, razón por la que considera se ha de revocar la decisión de primera instancia.

Vencido éste ha ingresado el expediente al despacho para desatar el litigio, a lo cual se procede previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

I.-PRESUPUESTOS PROCESALES:

Los llamados presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad ya que, en primer lugar, la demanda introductoria es idónea por cumplir los requisitos generales y los especiales que debe contener la de ejecución. El Juzgado es el competente para conocer del proceso no solo por la naturaleza del

asunto sino también por la cuantía del mismo y por el domicilio de los demandados. A su vez, demandante y demandado son sujetos de derechos y obligaciones que acudieron al proceso en debida forma, esto es, a través de la representación tanto legal como judicial, lo cual amerita concluir que se han reunido los requisitos de capacidad tanto procesal como para ser parte.

Desde el punto de vista de la actuación y el control que impone el artículo 132 del C.G.P. tampoco observa el despacho causal de nulidad que pueda invalidar el proceso, de modo que ello aunado a lo anterior, conlleva a una decisión de esa naturaleza.

Conocidos los antecedentes del presente proceso, la sentencia apelada y los reparos formulados contra la sentencia de primera instancia y la sustentación expuesta por el recurrente procede el juzgado a decidir conforme al artículo 328 del C.G.P., así:

2.- En el presente caso la inconformidad del apelante se circunscribe a la falta de los requisitos que deben contener las Facturas allegadas al proceso, es decir, considera el apoderado recurrente que **COLOMBIANA DE SALUD, no ha aceptado** los títulos ejecutivos.

3.- Al respecto ha de decirse que los requisitos formales del título ejecutivo deben ser objeto de recurso de reposición, conforme al artículo 430 del C.G.P.

Dice dicha norma:

“los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso”.

Sin embargo, de los documentos allegados por la parte actora se establecía una obligación clara expresa y exigible a cargo de **COLOMBIANA DE SALUD S.A.** y a favor de **SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LABORATORIOS S.A.S.**

Dice la apoderada judicial de la parte demandada que en ningún momento el Representante legal de **COLOMBIANA DE SALUD S.A.** recibió y aceptó las facturas objeto de este proceso, ya que la señora **LEYDI CASTELLANOS PUENTES es persona desconocida.**

Sin embargo, no existe prueba de los hechos que soportan las excepciones propuestas por el excepcionante, en franco incumplimiento de la carga que le imponía el artículo 167 del C.G.P.

En este sentido se destaca que la apoderada judicial de **COLOMBIANA DE SALUD** dejó de acreditar el fundamento fáctico en el que soportó su defensa.

Sobre esa afirmación, no existe más respaldo que su propio dicho, por lo que es necesario recordar que nadie tiene el privilegio de hacer de su versión prueba de lo que dice, pues *“es principio general de derecho probatorio y de profundo contenido lógico, que la parte no puede crearse a su favor su propia prueba”*; de allí que *“quien afirma un hecho en un proceso tiene la carga procesal de demostrarlo con alguno de los medios que enumera el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, con cualesquiera formas que sirvan para formar el convencimiento del Juez”*.

La apoderada de la parte ejecutante solicitó como prueba el testimonio de **LEYDY CASTELLANOS PUENTES**, quien aparece firmando las 10 facturas objeto de este proceso.

LEYDY CASTELLANOS PUENTES, quien es bacterióloga y especialista en instituciones de salud, dice que trabajó en **COLOMBIANA DE SALUD S.A.**, en la ciudad de Tunja de junio de 2015 a julio de 2018, era la coordinadora de laboratorio, y conoce que **SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LABORATORIOS S.A.S. (Labservis S.A.S.)** le prestaba los equipos y vendía los reactivos de laboratorio a la demandada; Ellos, se refiere a Colombiana de Salud, tenían en comodato los equipos de química, el equipo de hematología y el equipo de electrolito; acepta que la firma que aparece en las facturas que se le pusieron de presente si es suya, indicando el trámite que debía seguirse para el pago: Las auxiliares de laboratorio recepcionaban las facturas, las bajaban a la auxiliar contable (de nombre Rosmery) y ella se las entregaba a la dra. Silvia que en ese momento era la coordinadora de contabilidad y ellos hacían el pago.

Agrega la testigo que como al año y medio hubo una circunstancia con una hemoglobina que ellos decían que eran dos(2) pero sólo había llegado una, la siguiente llegó a los dos días, y entonces, la Dra. Carolina Alzate, quien era su jefe inmediato y coordinadora de prestación de servicios, le dijo que todo lo que llegara de reactivos de laboratorio tenía que revisarlos con factura en mano y ver que si estaban y darle el *“VISTO BUENO”* a la factura.

Indica que los insumos que aparecen en las facturas que se le pusieron de presente, los reactivos eran exclusivos para los equipos que *Labservis* tenían alquilados o en comodato a la institución; solamente servían para ese tipo de equipos, no para otros equipos. Colombiana de Salud no tenía otros proveedores para este tipo de reactivos sino solo con **SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LABORATORIOS S.A.S.**

Aclara que en **COLOMBIANA DE SALUD** habían dos oficinas o edificios: una, la parte operativa y la otra la parte administrativa. Los reactivos llegaban directamente al laboratorio porque en la sede administrativa no habían neveras para la conservación de la cadena de frío. No sabe si en la parte administrativa colocaran algún sello a las facturas. No le consta si Colombiana de Salud le quedó debiendo algún dinero a la empresa demandante.

De lo antes narrado se puede afirmar que quien aparece suscribiendo las facturas aquí debatidas, **LEYDY CASTELLANOS PUENTES**, si tenía facultades para ello.

El representante Legal de la demandante en su interrogatorio bajo juramento indica que

“Las facturas fueron presentadas para su pago en la forma pactada; no hubo glosas, devoluciones ni objeciones. No hubo novedades.”...“La señora LEYDY CASTELLANOS PUENTES SI era empleada de COLOMBIANA DE SALUD en ese momento.” “Alonso Emilio Torres llevaba las facturas personalmente al laboratorio clínico de la Colombiana de Salud de la Ciudad de Tunja.

El representante Legal de la demandada en su interrogatorio dijo no constarle si LABSERVIS S.A.” le haya prestado servicios a Colombiana de Salud. Que existía un protocolo para la presentación de las facturas por el área contable. Si se había suscrito un contrato de prestación de servicios, debía allegarse, lo mismo que la glosa o visto bueno y la factura pues se trata de un título complejo.

Miradas las pruebas en conjunto conforme al artículo 187 del C.P.C. En el proceso militan los siguientes documentos que indican sin lugar a dudas que LEYDI AZUCENA CASTELLANOS PUENTES, era la empleada que recibía los insumos médicos o reactivos de laboratorio para la Colombiana de Salud en la ciudad de TUNJA:

- Certificado de aportes para la seguridad social de la señora Leydi Azucena Castellanos realizada por la institución demandada.
- Correo electrónico en tres (3) folios, en donde se hace alusión a la deuda.

Luego la apoderada excepcionante no obra con lealtad al afirmar que la señora LEYDY AZUCENA era una persona desconocida para la Entidad demandada, cuando, por el contrario, era una trabajadora de la misma, constituyendo su proceder un indicio en contra conforme al artículo 249 del C.G.P.

Entonces, los problemas jurídicos que debían resolverse era si los títulos valores cuentan con los requisitos tanto generales como particulares para tenerlos como tales y El segundo problema que se circunscribió a establecer si las facturas que aparecen sin firma del Representante legal de la ejecutada **COLOMBIANA DE SALUD**, ni sello o firmadas por otra persona obligan a la aquí demandada, encuentran respuesta clara para este juzgador.

Y es que, de otro lado, *La Factura* es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.

El artículo 774 del C. de Co. (Modificado por el artículo 3° de la ley 1231 de 2008), ordena que además de lo establecido por el artículo 621 del mismo código, para los títulos valores, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan La factura deberá reunir, los siguientes requisitos:

I. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a la emisión.

2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.

3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura.

Se considera al respecto que no interesa que las facturas atrás relacionadas no estén firmadas, por la aquí ejecutada pues lo importante es que la factura que conserva el vendedor esté firmada por el comprador o **la persona que esté encargada de recibir la mercancía**, tal como lo expreso la juez del conocimiento.

Es de anotar que el comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía o el servicio en sus dependencias, para efectos de la aceptación del título valor, como lo indica el artículo 2 de la ley 1231 de 2008, que modificó el artículo 773 del Código de Comercio.

La reforma efectuada por la ley 1231 de 2008, recogió las observaciones y problemas prácticos que se presentaban y propugnó por salvaguardar los derechos del vendedor.

“En la práctica, la mala costumbre de enviar al comprador la factura cambiaria con la mercancía y permitir por el empleado –secretaría, bodeguero, vigilante- como si fuera un simple documento de remisión, ha dado lugar a que el vendedor reciba un instrumento sin la firma del comprador, ni de persona autorizada. De allí surge el problema de que al ejecutarse la acción cambiaria por la vía del proceso ejecutivo si se rechaza el pago, la excepción propuesta, generalmente de mala fe por el demandado, sea la de no ser el ejecutado la persona que suscribió el título (art. 784-I), lo que obliga al demandante a procurarse unos medios de prueba difíciles y a veces a tener que recurrir a la teoría de la apariencia (art. 640-2)...” (Bernardo Trujillo Calle, “De los Títulos Valores, T. II, Editorial Temis, 1995, pág. 242).

Lo dispuesto por la ley 1231 recoge lo que indica una teoría más amplia cual es la del mandato aparente, y de un principio universal como es el de buena fe negocial.

“En materia de representación, para suscribir a nombre de otro un título valor deben observarse los artículos 640 a 642 en concordancia con el artículo 663 del C. de Co., puesto que allí se precisa que para otorgar un poder para que un tercero suscriba un título valor se requiere que ese mandato conste por escrito. Conforme dichas normas, quien suscribe un título valor a nombre de otro sin ser su apoderado, sin ser su representante, no obliga a su mandante, no obliga a su representado, sino que se obliga personalmente, de tal suerte que el título valor ya no será a cargo del presunto firmante o mandante sino del mandatario”. (Hildebrando Leal Pérez (Títulos Valores, 3ª. Ed. Editorial Leyer, pág. 176).

Debe tenerse en cuenta que el grado de buena fe y corrección de los interesados en conflicto juega un papel trascendental para la aceptación de la representación aparente (Fernando Hinestrosa, La Representación, U. Externado, 2008, pág. 347).

Como ejemplo se trae el caso de la mujer que se presume autorizada por el marido en la compra de cosas muebles al contado o al fiado de objetos naturalmente destinados al consumo de la familia (art. 192 del C.C.). Cada uno de los cónyuges está legitimado para celebrar negocios para el cubrimiento adecuado de las necesidades de la vida familiar, con eficacia sobre el otro cónyuge (Pág. 149 ibidem).

Nuestra Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de febrero de 1964 se pronunció sobre el mandato aparente señalando como requisitos suyos: *“El que una persona contrate en nombre y lugar de otra, y que por las apariencias que rodean el negocio, o por la conducta del mandante, el tercero que contrató puede creer fundadamente y de buena fe que celebra la convención con quien tiene poder suficiente para representar a dicho mandante.”* (Sentencia citada por Trujillo Calle en el Tomo I de su obra, pág. 290)

En el presente caso, quienes firmaron las facturas cuestionadas por la apoderada judicial de COLOMBIANA DE SALUD S.A., no es cualquier persona, sino se trata nada menos que una profesional y que era la Coordinadora del Laboratorio. También se debe tener en cuenta la antigüedad de las relaciones comerciales entre las partes, y la forma como se hacían los pedidos, la persona que enviaba las factura, la forma, las personas que recibían las insumos o reactivos y quien firmaba los mencionados documentos.

Finalmente resulta absolutamente ilógico, irracional, irrealizable el pensar que el Representante Legal de una Entidad Promotor de Salud, o Una Institución prestadora del servicio con cobertura nacional tuviera que firmar absolutamente todas las facturas de compra de medicamentos, suministros de todo tipo, etc., de todo el país, o inclusive de una zona determinada del mismo.

De otro lado, se tiene que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda. Además, dice el artículo 305 del C.P.C., que no podrá condenarse al demandado por causa diferente a la invocada en la demanda.

La Corte Suprema de Justicia ha manifestado que:

“La sentencia para ser congruente debe decidir solo sobre los temas sometidos a composición del juez y con apoyo en los mismos hechos alegados como causa petendi, pues si se funda en supuestos fácticos que no fueron oportunamente invocados por las partes, lesionaría gravemente el derecho de defensa del adversario al sorprenderlo con hechos de los que, por no haber sido alegados, no le habrían dado oportunidad para contradecirlos. Tal fundamento para afirmar que igual da condenar a lo no pedido, que acoger una pretensión deducida, pero con causal distinta a la invocada, es decir, con fundamento de hechos no alegados” (28 de noviembre de 1977 y 13 de junio de 1990).

En el presente caso se observa que la excepción se limitó única y exclusivamente a cuestionar la falta de aceptación de las Facturas y la falta de firma y sello por parte de Colombiana de salud S.A. En los

fundamentos fácticos de dicha excepción siempre se refirió a las facturas como título valor, en ningún momento se habló o se dijo que se trataba de un título ejecutivo complejo. Es un argumento nuevo que se trae con la sustentación del recurso de apelación, pero es un tema que no fue debatido en la primera instancia ni en forma oportuna.

Al proponerse excepciones de mérito, dice el numeral 3 del artículo 96 del C.G.P. deberá expresarse su fundamento fáctico. En procesos ejecutivos, está el artículo 442 del mismo código, que regula lo relacionado con la proposición de excepciones dentro de estos procesos y es enfático en determinar que el **demandado deberá expresar los hechos en que se fundan las excepciones propuestas**.

Se reitera: En razón del principio de congruencia que informa al proceso civil, este Juzgado no se pronunciará sobre las contingencias recién traídas a cuento. Son ajenas al sustrato fáctico que se esgrimió en la **formulación de la excepción**, por manera que no pueden ser materia de estudio en esta oportunidad, ya que *“la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda”* y, *“con las excepciones que aparezcan probadas”* (art. 281, C. G. P.).

Por lo expuesto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO.- Confirmar la sentencia de fecha mayo 3 de 2013 pronunciada por el Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja, dentro del proceso ejecutivo instaurado por **La sociedad SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LABORATORIOS S.A.S.**, contra **COLOMBIANA DE SALUD S.A.**, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO SIN CONDENA en costas del proceso en esta instancia, por no haberse causado.

TERCERO: Devolver el expediente digital al juzgado de origen.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

HERNANDO VARGAS CIPAMOCHA
Juez Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Tunja

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD DE TUNJA.

El anterior auto fue notificado por Estado **No 06**, hoy
DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE DOS MIL
VEINTITRÉS (2023)

CRISTINA GARCIA GARAVITO
Secretaria

Firmado Por:
Hernando Vargas Cipamocha
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 02 Oral
Tunja - Boyaca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cda022a9fc24674a75903e4c2d18be0d9149a812598a400eb627a106d1fa7a**

Documento generado en 16/02/2023 03:00:45 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>